

Santiago, veinte de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTOS

En causa RUC 220094888-0, RIT 45-2023, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, por sentencia de diecinueve de julio del año en curso, se condenó a los acusados [REDACTED] a sufrir cada uno, la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, accesorias legales, multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales, comiso de especies y dinero, y al pago de las costas, como autores del delito consumado de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de drogas o sustancias estupefacientes, previsto y sancionado en los artículos 1° y 4° de la Ley 20.000, cometido el día 26 de septiembre de 2022 en la comuna de Copiapó, pena corporal que ambos sentenciados deben cumplir de manera efectiva, con los respectivos abonos que se les reconoce en el fallo.

En contra de la decisión condenatoria, la Defensoría Penal Pública, dedujo sendos recursos de nulidad, los que fueron conocidos en la audiencia pública celebrada el treinta y uno de agosto último, disponiéndose *-luego de la vista-* la notificación del presente fallo vía correo electrónico a los intervinientes, según consta del acta levantada en su oportunidad.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, ambos recursos consignan como causal principal, la contenida en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, esto es, infracción sustancial de Garantías Constitucionales que se hubieren verificado en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia.



En sus respectivos libelos, ambas defensas estiman que la referida causal comprende dos hipótesis.

Por la primera de ellas, se denuncia la infracción a la norma constitucional prevista en el artículo 19 número 7 de la Constitución Política de la República, en relación con lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, dado que, el indicio que indica Carabineros en el parte policial para los efectos de proceder al control de identidad no resulta ser suficiente para proceder al registro de los encausados, en tanto que la segunda, consiste en la vulneración de lo que dispone el artículo 228 del mismo cuerpo legal, ya que, sólo durante la audiencia de juicio oral se tuvo conocimiento que los funcionarios policiales no consignaron en el parte policial las razones o circunstancias en que se habría verificado su detención, lo que evidencia una infracción flagrante de la garantía contemplada del artículo 19 número 3 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho a la defensa material de los encausados.

En relación con la primera hipótesis, las defensas indican que la vulneración del derecho a su libertad personal se verifica cuando los funcionarios de Carabineros, erradamente, configuran bajo su perspectiva, una hipótesis de indicio, puesto que, de acuerdo a lo consignado en el parte policial, la decisión de efectuar un control vehicular al automóvil en el que se desplazaban ambos acusados y un tercer sujeto, se debió a que éste tenía todos sus vidrios polarizados, móvil del que descendieron [REDACTED] el sujeto que iba con ellos, en tanto que Torres permaneció en su interior.



En ese sentido, arguyen que el hecho de huir del lugar al advertir la presencia policial, por sí solo, no satisface los requisitos esenciales para considerar la validez del indicio, pues esa apreciación realizada por el funcionario a cargo del procedimiento no es un dato objetivo, certero y verificable de los supuestos legales que autorizan el control de identidad al que fueron sometidos.

Estiman las defensas, que al no verificarse en el caso en marras, todos los elementos para validar el actuar de los agentes policiales, sólo se mantiene la hipótesis de la apreciación subjetiva, apartándose de las normas legales que regulan sus actuaciones.

Explican que es subjetiva, porque no da cuenta de ningún elemento objetivo del cual pueda desprenderse de que los sentenciados se disponían a cometer un crimen, simple delito o falta, sino sólo de la impresión e interpretación que hace el policía.

Añaden que, aun cuando hubiesen efectuado un control vehicular y en su desarrollo, hubiesen constatado la existencia de una falta a la ley del tránsito, en este caso, por la totalidad de los vidrios polarizados del vehículo en que se desplazaban los controlados, tampoco sirve para abarcar la hipótesis que prevé la norma en comento.

Adicionan, que de la manera antes explicada, el actuar policial se circunscribe bajo una apreciación subjetiva de los funcionarios, hipótesis que no está en sintonía con al espíritu del legislador, puesto que, únicamente el hecho de haber huido de la policía, no resulta ser una circunstancia que, por sí sola, puede



estimarse como suficiente para proceder a un control de identidad, al tratarse de un hecho feble y precario.

Estiman, que evadir el contacto con Carabineros es un acto normal y aceptado, más aún cuando no se encontraban en una situación de flagrancia de comisión de un delito, siendo por ello ajustado a derecho e incluso justificado.

Señalan, que aquello puede ser una acción natural y esperable de la población en general ante la presencia policial, la que puede tener múltiples motivaciones, desde la mera intención de no interactuar con Carabineros, hasta la evasión de un conflicto menor (no portar cédula de identidad o circular en la vía pública con bebidas alcohólicas, a modo de ejemplo).

Expresan que la transgresión a la norma constitucional es trascendente, porque bajo la hipótesis ya planteada, no sólo se vulnera la libertad personal de los acusados, sino que, con ocasión de la actuación reprochada, fueron encontrados elementos que permitieron al Ministerio Público sustentar la acusación, los que el Tribunal valoró positivamente para arribar a un veredicto condenatorio.

En lo tocante a la segunda de las hipótesis planteadas, esto es, la vulneración de garantías por infracción al deber de registro previsto en el artículo 228 del código adjetivo, las defensas plantean que mediante la declaración de los funcionarios policiales de la sección Centauro que participan en el procedimiento policial que termina con la detención de ambos acusados, se constata que la información vertida por ellos en estrados, no estaba comprendida en el parte



policial, omisión que se reveló mediante los diversos ejercicios procesales efectuados al tenor del artículo 332 del mismo código, quedando en evidencia que los funcionarios policiales no consignaron la circunstancia de que el vehículo en el que desplazaban los encausados había eludido el control al advertir la presencia policial, siendo conminados por éstos a detener la marcha mediante la utilización de los aparatos sonoros y luminosos propios de los carros institucionales, a lo que se suma que tampoco se indica en el documento el tiempo que duró la persecución, y la distancia recorrida en el afán de alcanzarlos, omisiones que la propia sentencia tiene por ciertas.

Manifiestan, que la omisión al deber de registro, en su completitud(sic), sí resulta ser una infracción sustancial a la Garantía Constitucional del artículo 19 número 3 de la Carta Fundamental, en específico, el derecho a una defensa técnica y material, y al derecho a una sentencia que emane de un proceso justo y legalmente tramitado.

Finalizan este análisis señalando que, de haber conocido dicha información con anterioridad, la teoría del caso habría sido abordada desde otra perspectiva.

En síntesis, ambas defensas piden que se anule el juicio oral y la sentencia recaída en él, se determine que el procedimiento debe retrotraerse al estado de realizarse una nueva audiencia de juicio oral, con miembros no inhabilitados, excluyéndose la prueba testimonial, pericial, documental y los otros medios de prueba que se individualizan en el auto de apertura de juicio oral.



SEGUNDO: Que, como causal subsidiaria, ambas defensas, invocaron el motivo absoluto de nulidad previsto en la letra e) del Artículo 374, en relación con el artículo 342 letra c), ambos del Código Procesal Penal.

La defensa de [REDACTED] lo hace consistir en la infracción del artículo 297 del código del ramo, puesto que se vulneran los principios de la lógica, especialmente, los de corroboración, no contradicción y razón suficiente.

Señala, que el Tribunal da por acreditada la participación de su representado como autor directo del delito de tráfico de pequeñas cantidades de droga del artículo 4 de la ley 20.000, no obstante que, tal como consta en el parte policial, corroborado por las declaraciones de los funcionarios policiales, éste no mantenía consigo ninguna sustancia sujeta al control de la ley 20.000, razón por la que, de manera subsidiaria, solicitó la absolución de su representado por falta de participación en los hechos materia de la acusación, a lo que se suma, que en dicho libelo, no se indica cuál sería la conducta que habría desarrollado, a la luz de los verbos rectores contemplados en la norma legal que contiene el ilícito por el cual fue condenado.

Explica que, desde esa perspectiva, el tribunal infringe el principio de la razón suficiente, porque no existe ningún antecedente que dé cuenta de la hipótesis de infracción al artículo 1 de la ley 20.000 que se le imputa, y por ello es que en su alegato de clausura se refirió a la posesión, como la posible conducta que podría atribuirse a su representado.



Añade, que lo cuestionable es que el tribunal, en el motivo décimo séptimo, construye su participación a partir de indicios, sin embargo, los propios funcionarios policiales concordaron en que al momento de revisar las pertenencias de los investigados, a su representado se le encontró únicamente un objeto con apariencia de arma de fuego que posteriormente se estableció, se trataba de un arma de fogeo.

Sostiene que, por tratarse de un delito de mera actividad, se requiere que el partícipe o copartícipe sobrepase la barrera de dar inicio a la ejecución del hecho por medios directos, en forma independiente.

Indica que, a mayor abundamiento, los sentenciadores expresan en la sentencia, que a [REDACTED] se le atribuye participación en los hechos, de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal, primera variante, y desde esa perspectiva, se debe analizar, si resulta ser correcta la autoría imputada(sic).

Reitera, finalmente, que la sentencia arriba a la convicción de su participación como autor directo sólo a partir de indicios, dado que no existe prueba alguna que dé cuenta de la posesión material de droga.

Por su parte, la defensa de Torres Lucumi, a propósito de la misma causal subsidiaria, sostiene que el fallo recurrido infringe gravemente el artículo 297 del Código Procesal Penal, puesto que se vulneran los principios de la lógica, especialmente, el que dice relación con el principio de corroboración y razón suficiente.



Refiere, que debido a la omisión de las actuaciones policiales, en específico, la omisión de señalar en el parte policial y en las declaraciones policiales, que el vehículo en el que iba su defendido, no obedeció la orden de detener su marcha, siendo necesario una persecución y la utilización de los aparatos sonoros y luminosos dispuestos en los carros policiales, cuesta entender que el tribunal no se cuestionara si el procedimiento fue conforme lo señalado en el parte policial o en concordancia con lo expuesto en estrados por los funcionarios policiales.

Agrega que, relacionado con lo anterior, el tribunal a quo da por establecido que el indicio para proceder al control de identidad investigativo fue que dos sujetos emprendieron la huida sabiendo que iban a ser fiscalizados, sumado a que se transportaban en un vehículo con sus vidrios totalmente polarizados, en un sitio conflictivo y donde habitualmente hay tráfico de drogas.

En este contexto, el razonamiento judicial es acomodaticio y carente de elementos objetivos que permitan racionalmente comprender que hubo indicio suficiente para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 85 del Código Procesal Penal.

Ambas defensas solicitan en relación con esta causal que se anule el juicio oral y la sentencia recaída en estos autos, y se determine el estado en que debe quedar el procedimiento, debiendo retrotraerse al estado de realizarse una nueva audiencia de juicio oral.



TERCERO: Que en el motivo décimo, los sentenciadores tuvieron por establecidos los siguientes hechos:

“Que el día 26 de septiembre de 2022, a las 19:00 horas aproximadamente, en la vía pública en calle Chancoquín frente a la numeración 813, Copiapó, mientras funcionarios de Carabineros se disponían a fiscalizar un vehículo de color burdeo que era conducido por el acusado Jhon Edwin Torres Lucumi, en compañía de [REDACTED], estos dos últimos, al momento de acercarse los funcionarios policiales descendieron del vehículo y huyeron del lugar en dirección al sector de Tomas, logrando ser alcanzados por Carabineros, quienes sorprendieron a [REDACTED] portando en un morral una pistola de fogueo, mientras que el tercero portaba un bolso tipo banano en el que guardaba cinco envoltorios de papel contendores de 1 gramo 69 mg de cocaína base, cinco teléfonos celulares y \$54.090.- en dinero en efectivo. En tanto, al fiscalizar a TORRES LUCUMI quien no alcanzó a huir, éste se encontraba en el vehículo aludido, lugar en el que se encontró en el sector de la palanca de cambios, a simple vista de los ocupantes, 106 envoltorios de papel contendores de 37 gramos de cocaína base, \$284.000.- en dinero en efectivo, \$10.000.- bolívares y \$23 dólares”.

CUARTO: Que, para desestimar las alegaciones planteadas por las defensas en el motivo principal de su arbitrio, los juzgadores de la instancia, en el considerando décimo séptimo del fallo en revisión, argumentaron:



“Que en este sentido ambas defensas han enarbolado, como alegación principal, la ilegalidad en el control de identidad investigativo practicado por Carabineros a sus defendidos, en el sentido que no existiría un indicio que habilitara a la policía para practicarlo.

A este respecto, si bien esta alegación ya fue conocida y resuelta ante el Juzgado de Garantía respectivo, al momento del control de la detención y en la audiencia de preparación de juicio oral, este Tribunal entiende que no existe impedimento alguno para volver a revisar nuevamente esta situación en esta etapa procesal.

En ese orden de ideas, si bien las Defensas han logrado demostrar en juicio que en el parte policial no se dejó constancia alguna en relación a que el vehículo en que se desplazaban los acusados hubiera huido al momento de ser controlado, como asimismo, que se le hubiera conminado a detenerse a través de elementos sonoros y luminosos, como también cuánto habría durado dicho seguimiento o persecución. Lo cierto, es que nada de ello incide sustancialmente en la cuestión fáctica que nos convoca, puesto que ninguno de esos antecedentes de los que ha dado cuenta la Defensa formaban parte de la imputación fiscal desarrollada por parte del Ministerio Público, bastando una simple lectura de su contenido para advertirlo.

En ese orden de ideas, y aun cuando estos sucesos aparecieran en el parte policial, de modo alguno estos Jurisdicentes podrían haberlos considerado para los efectos de incorporarlos en el hecho que se tuvo por acreditado, por cuanto



con ello se vulneraría gravemente el principio de congruencia, al considerar hechos o circunstancias no contenidas en la acusación fiscal, en virtud de las cuales se perjudica o se desmejora gravemente la posición de los imputados, generándose con ello, el motivo absoluto de nulidad respectivo.

Posteriormente, en relación a la argumentación referida a que huir de la policía no es un indicio que habilite a desarrollar un control de identidad, esta Sala considera que debe efectuar una lectura correcta de la situación, correspondiendo efectuar una distinción entre dos situaciones muy diversas, que no pueden ser tratadas de una misma forma.

En este sentido, por una parte, se debe ponderar aquellos casos en que una persona, sin que haya sido abordada por los funciones policiales, solo al ver la presencia policial, salga huyendo del lugar, entendiendo estos Jurisdicentes que ese es el evento que se hace cargo la Excelentísima Corte Suprema en el fallo que se ha invocado ante estrados por la Defensa. Sin embargo, una cosa muy distinta es que cuando si la policía ya interactuado con la persona, ya sea informando al afectado respecto de la circunstancia de realizar un control policial o cuando éste ya está en pleno desarrollo, y la persona sale huyendo.

Dicho matiz, en concepto de estos Jueces, es, sin duda, el que se considera que justifica plenamente el control de identidad investigativo efectuado por Carabineros de Chile, ya que si bien estos hechos se inician en el contexto de un control vehicular, lo cierto es que cuando se estaba en conocimiento de la fiscalización, dos personas salieron corriendo desde el vehículo que se intentaba



controlar, intentando evadir la acción policial, todo ello dentro de un contexto que hacía presumir la comisión de un delito, esto es, circular en un auto con sus vidrios totalmente polarizados, en un barrio conflictivo como lo denominaron los propios policías y donde habitualmente se desarrolla tráfico de drogas, y posteriormente, todos esos indicios se corroboraron al encontrarse dentro del móvil fiscalizado ciento seis envoltorios contenedores de cocaína base, diversas sumas de dinero de distintos países y de diversa denominación, y en las personas que huyeron se encontró otras dosis de la misma droga, más dinero y un arma a fuego.

En consecuencia, si bien se pudiera entender que la Defensa logró demostrar la existencia de una omisión al deber de registro por parte de Carabineros, ella en ningún caso resulta sustancial, al no encontrarse contempladas dichas circunstancias omitidas dentro de los hechos de la acusación fiscal, y por lo mismo, tampoco fueron consideradas por parte de este Tribunal. Luego, dado el contexto en que se desarrolla el control de identidad, y por todos los antecedentes reseñados previamente, esta Sala considera que es precisamente la huida de los dos pasajeros del móvil fiscalizado la que habilita a la policía a practicar el respectivo control de identidad, y con ello, no existe la vulneración de garantías que ha denunciado la Defensa, debiendo entonces desestimarse toda esta línea argumentativa.

Acto seguido, la Defensa del imputado [REDACTED], dedujo en forma subsidiaria, la alegación de falta de participación de su cliente en los hechos investigados, fundada principalmente en la circunstancia que a su defendido no se le encontró droga en su poder.



A este respecto, si bien resulta efectiva esta última circunstancia argumentada por la Defensa, en cuanto a que al inculpado [REDACTED] no se le encontró en posesión de droga, no es menos cierto que existe un cúmulo de indicios en su contra, los cuales en su conjunto, en concepto de este Tribunal, resultan más que suficientes para concluir que el este imputado tuvo una actuación inmediata y directa en los hechos que se investigan.

En efecto, estos indicios serían los siguientes: a) No resultó controvertida en juicio la circunstancia que ambos imputados, en compañía de un tercero, viajaban a bordo de un vehículo que tenía todos sus vidrios polarizados y que circulaban por una población reconocida por ser un lugar en el que se vende droga. b) Tampoco se cuestionó que el enjuiciado [REDACTED] y el tercero se dieron a la fuga al momento en que se detuvo el vehículo en que viajaban para ser fiscalizados por Carabineros. c) Resultó pacífico, además, que en el vehículo que viajaban los imputados, en el lugar de la palanca de cambios, se encontraron ciento seis envoltorios de pasta base de cocaína, además de dinero de distintos países y diversa denominación. d) Del mismo modo, no resultó debatida la circunstancia que en poder del tercero que huyó en conjunto con el imputado [REDACTED] se encontró cinco envoltorios de pasta base de cocaína, cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo de diversa denominación. e) Finalmente, tampoco se discutió respecto a que al imputado [REDACTED] se le encontró en su poder una pistola a fuego.

Teniendo en consideración todo lo previamente concluido, aparece como evidente que los imputados tenían pleno conocimiento del hecho que se poseía



droga al interior del vehículo en que se transportaban, y además, conforme al mérito de las especies que fueron encontradas en su poder, no sólo lo toleraban mediante una mera indiferencia, sino más bien formaban parte directa de dicho hecho ilícito.

En efecto, respecto del caso que nos convoca en esta parte, esto es, el encausado [REDACTED] en su poder se le encontró una pistola de fogueo, la cual, resulta ser, conforme a las máximas de la experiencia, un elemento utilizado con frecuencia en las labores de tráfico, con la finalidad de cumplir funciones de protección de la droga.

En este sentido, careciendo de otros antecedentes de convicción que pudieran refutar las conclusiones obtenidas por estos Sentenciadores a través de los indicios anteriormente reseñados, es que se debe descartar esta alegación subsidiaria de la Defensa del acusado [REDACTED] por considerar que éste tuvo una participación criminal culpable en los eventos que nos convocan. Para concluir este punto, resulta indispensable señalar que estos Magistrados entienden que con la prueba rendida se ha adquirido la convicción suficiente, es decir, se ha acreditado más allá de toda duda razonable, la existencia del delito de tráfico ilícito de drogas por el cual se ha acusado, como asimismo, la participación culpable que les ha cabido en los mismos a los encausados William Andrés [REDACTED] en los términos de los artículos 14 N° 1 y 15 N° 1 del Código Penal, lo que les confiere la calidad de autores, razón por la cual necesariamente sobre este ilícito se dictará sentencia condenatoria en la presente causa.”



QUINTO: Que, en lo concerniente a la primera hipótesis de la causal principal invocada por las defensas en sus respectivos recursos de nulidad, cabe indicar que el debido proceso es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y al efecto, el artículo 19, N° 3, inciso sexto de la Carta Fundamental, confiere al legislador el deber de definir las garantías de un procedimiento racional y justo.

Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen, a lo menos, un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes, les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.

SEXTO: Que, en otro orden de consideraciones, en cuanto a las facultades autónomas de actuación que la ley le entrega al personal policial, así como lo referido al respeto del debido proceso y la intimidad, esta Corte Suprema ha señalado reiteradamente que la negativa a admitir prueba ilícita tiene como fundamento la concepción del proceso como instrumento de resolución jurisdiccional de litigios dentro del ordenamiento jurídico, lo que conduce a que todo acto que infrinja de manera sustancial dicho sistema debe ser excluido del mismo.



SEPTIMO: Que, en relación a las normas de procedimiento aplicables al caso concreto, resulta necesario proceder a su análisis a efectos de poder determinar si ellas han sido transgredidas y, en su caso, examinar si dicho quebrantamiento ha significado la vulneración de los derechos fundamentales denunciados por las defensas de los acusados.

OCTAVO: Que, como se ha dicho en ocasiones anteriores por esta Corte, el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa, las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles, y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación.

Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (*Sentencias Corte Suprema Roles N° 7178-17, de 13 de abril de 2017; N° 9167-17, de 27 de abril de 2017; N° 20286-18, de 01 de octubre de 2018; N° 28.126-18, de 13 de diciembre de 2018 y N° 13.881-19, de 25 de julio de 2019*).

Es así, como el artículo 83 del citado cuerpo normativo establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales, permitiendo su gestión autónoma para prestar auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b); resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación



de rastros o vestigios del hecho, etcétera,(letra c); identificar testigos y consignar las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d); recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). Sólo en las condiciones que establece la letra c) recién citada, el legislador autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación.

A su vez, los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal, regulan el procedimiento de control de identidad, estableciendo la facultad de los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona sin orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista algún indicio de que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad; facultando para el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 *-que describe lo que debe entenderse por situación de flagrancia-* así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de aprehensión pendiente.

NOVENO: Que las disposiciones recién expuestas tratan, entonces, de conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos, con los derechos y



garantías de los ciudadanos, estableciéndose en forma general, la actuación subordinada de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al órgano establecido por ley de la referida tarea, los que a su vez, actúan conforme a un estatuto no menos regulado -y sometido a control jurisdiccional- en lo referido a las medidas que afecten los derechos constitucionalmente protegidos de los ciudadanos.

DECIMO: Que a fin de dirimir lo planteado en ambos recursos como primera hipótesis de vulneración de Garantías Constitucionales, es menester, estarse a lo asentado por los jueces de la instancia al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, intente una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, porque ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal.

UNDÉCIMO: Que asentado lo anterior, conviene tener presente que en la especie, las defensas han cuestionado el actuar de los funcionarios policiales, al estimar que el procedimiento de detención de los sentenciados fue ilegal –en cuanto no existía indicio para controlar su identidad-, escenario en el cual realizaron, de manera autónoma, diligencias investigativas diversas de aquellas a las que se encuentran facultados de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 83 del Código Procesal Penal, lo que implica que todas las pruebas derivadas de



tales diligencias son ilícitas, y por ende, debieron ser valoradas negativamente por los juzgadores de la instancia.

DUODÉCIMO: Que, de la sola lectura de los hechos que se tuvieron por establecidos soberanamente en la sentencia *-los que resultan inamovibles para esta Corte, en atención a la causal de nulidad en análisis-*, aparece de manifiesto que el actuar de los funcionarios policiales se ajustó a derecho, toda vez que el procedimiento se inicia cuando el vehículo conducido por Torres Lucumi, desobedece la orden de detenerse que le efectúa el personal policial, y cuyo propósito era proceder a su control, debido a que dicho automóvil tenía todos sus vidrios polarizados, detalle que evidentemente, por sí solo, no constituye delito, sino una falta reglamentaria descrita y sancionada en la Ley de Tránsito, lo que motiva una breve persecución que culmina cuando el móvil detiene su marcha, momento en el que, desde el interior del vehículo descienden dos personas -el acusado [REDACTED] y tercer sujeto que iba en su interior- quienes rápidamente fueron alcanzados, dinámica que justifica plenamente el control de identidad al que todos ellos fueron sometidos al verificarse en la especie, las hipótesis que contempla el artículo 85 del código de ramo, que faculta a los funcionarios policiales para proceder de manera autónoma, en este caso, el registro de las vestimentas de los sujetos -incautando drogas y un objeto con apariencia de arma de fuego- y del vehículo en el que se transportaban, cuyo conductor era Torres Lucumi, en donde encuentran 106 envoltorios de papel contendedores de cocaína base y dinero en efectivo tanto nacional como extranjero, procediendo a la detención de todos los ocupantes del referido automóvil.



En efecto, no puede estimarse inocuo desobedecer una orden policial, darse a la fuga, y finalmente descender del automóvil y escapar para evitar ser controlados por los miembros de la patrulla de Carabineros, conductas que, no cabe duda, califican como indiciarias en los términos que exige el artículo 85 del código del ramo, procedimiento que, huelga recordar, culminó con la detención de los tres ocupantes del vehículo, dado que [REDACTED] portaba entre sus vestimentas un objeto con apariencia de arma de fuego, el tercer sujeto llevaba consigo cinco envoltorios de cocaína base, cinco teléfonos celulares y \$54.000 en dinero efectivo, en tanto que en el vehículo, cuyo conductor era Torres Lucumi, se incautaron 106 envoltorios contenedores de 37 gramos de la misma sustancia, más \$ 284.000, 10 Bolívares y 23 dólares estadounidenses.

De lo antes narrado, se sigue que los sentenciados fueron objeto de un control de identidad investigativo que se desarrolló con estricto apego a la normativa que se denunció infringida por las defensas, marco normativo que los habilitó para actuar de manera autónoma, descartándose con ello la ilegalidad reclamada por las defensas.

DÉCIMO TERCERO: Que, en lo tocante a la segunda hipótesis de vulneración de Garantías Constitucionales esgrimida por las defensas, consistente en la omisión del deber de registro que ordena el artículo 228 del Código Procesal Penal, esta Corte no comparte sus argumentos, desde el momento que, si bien la norma en comento establece que la policía levantará un registro en el que dejará constancia inmediata de las diligencias practicadas, con expresión del día, hora y lugar en que se hubieren realizado, y de cualquier



circunstancia que pudiere resultar de utilidad para la investigación, el inciso final de dicha disposición señala perentoriamente que, en todo caso, estos registros no podrán reemplazar las declaraciones de la policía en el juicio oral.

De lo anterior, aparece entonces que, no obstante, haberse comprobado durante el juicio que los funcionarios a cargo del procedimiento no consignaron en el parte policial la huida del vehículo, el tiempo empleado en la persecución, ni la distancia recorrida hasta conseguir su alcance, no se advierte la existencia de un menoscabo o debilitamiento del trabajo de las defensas, ya que, ambas reconocen en sus respectivos libelos, que dicha información fue obtenida durante los contrainterrogatorios de los policías mediante los ejercicios procesales que ofrece el artículo 332 del código del ramo, revelación que permite concluir fuera de toda duda, que los reclamantes ya conocían esos antecedentes, por lo que la mentada sorpresa no era tal, y por ende, mal pueden alegar indefensión o menoscabo en su labor, al no haberse registrado las circunstancias que motivaron el control de identidad y la posterior detención de sus representados, lo que conduce a que esta Corte descarte la ilegalidad denunciada por ambas defensas en sus respectivos recursos.

DECIMO CUARTO: Que, la causal subsidiaria impetrada por las defensas en sus respectivos libelos recursivos se funda en el motivo absoluto de nulidad contemplado en el artículo 374 letra e), en relación con los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal, y que en el caso de [REDACTED] consiste en que los jueces infringen las reglas de la lógica, especialmente, la de corroboración, no contradicción y de razón suficiente, al estimarlo como autor



directo del ilícito por el que fue condenado, no obstante, que en el juicio se demostró que éste no portaba droga, antecedente que sirvió de base para solicitar de manera subsidiaria su absolución, y porque, además, en la acusación, no se explicitó la conducta que éste habría desplegado, al tenor de los verbos rectores que contiene el artículo 4 de la ley 20.000, sin perjuicio de lo cual, el Tribunal lo calificó en la hipótesis de posesión de sustancias ilícitas.

Sobre estos defectos, basta decir que el artículo 297 del Código Procesal Penal ha dispuesto cómo deben darse por acreditados los hechos, entregando el legislador al tribunal de instancia la valoración de la prueba con plena libertad, siendo su única limitación que no contradiga los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, pudiendo, a partir de la prueba traída al juicio, razonar y justificar la decisión en uno u otro sentido.

Que en este caso concreto, los medios de pruebas rendidos en el juicio oral no sólo fueron reproducidos, sino también sopesados al tenor de las alegaciones de los intervinientes, explicitando los juzgadores en sus razonamientos décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo, los motivos por los cuales estimaron que la prueba era suficiente para formar convicción en el estándar que enseña el artículo 340 del código del ramo, de que [REDACTED] debía ser condenado como autor del delito materia del juicio, por lo que las críticas formuladas por su defensa carecen de relevancia.

En rigor, de la sola lectura del libelo recursivo, a propósito de esta causal subsidiaria, se desprende claramente que lo que se intenta impugnar es la



valoración que hizo el tribunal, y sobre cuya base fijó los hechos y las razones que condujo a desestimar sus pretensiones.

De esta forma, formula críticas al razonamiento de los Jueces por haberlo estimado autor directo, en circunstancias que los propios aprehensores aseguraron de manera coincidente que éste no llevaba droga consigo, y que el tribunal le atribuyera posesión, cuando en la descripción fáctica el persecutor nada indicó al respecto. Sin embargo, dichas alegaciones sobre la apreciación de las pruebas, reservada a los jueces, son más propias de un recurso de apelación y carecen de la eficacia legal requerida para configurar una causal de nulidad como la intentada.

Lo anterior, por cuanto al impugnarse la sentencia por esta causal, la recurrente no explica de qué manera se habrían infringido los principios de la lógica enunciados, sino que sólo reprocha que los Jueces decidieran condenar a [REDACTED] como autor directo de posesión de droga, no obstante, haberse acreditado que éste no portaba consigo sustancia ilícita alguna.

Sólo se intenta una escasa reflexión para explicar de qué manera se infringe el principio de razón suficiente, empero, recurriendo a los mismos argumentos ya esgrimidos, en tanto que, nada dijo respecto de los otros principios que, a su juicio, también fueron lesionados en el ejercicio de valoración que condujo a los Jueces a la convicción expresada en la sentencia, en orden a estimarlo como autor directo del delito de tráfico de pequeñas cantidades de drogas del artículo 4 de la ley 20.000, trabajo para el que gozan de absoluta libertad, con las limitaciones referidas en el segundo párrafo de este razonamiento.



Sigue de ello, que lo que sí es revisable por este medio de impugnación es la estructura racional del juicio o discurso valorativo sobre la prueba desde la perspectiva antes enunciada.

En otras palabras, sólo es posible estimar el recurso por esta causal si el tribunal a-quo determina su convicción sobre la base de criterios manifiestamente arbitrarios o aberrantes, cuyo no es el caso, conforme las razones anotadas por los Jueces en los considerandos décimo quinto a décimo séptimo de la sentencia atacada.

En consecuencia, conforme lo expuesto, se rechazará la causal subsidiaria de nulidad alegada por la defensa de [REDACTED]

DECIMO QUINTO: Que basta para desestimar la causal subsidiaria de nulidad levantada por la defensa del sentenciado Torres Lucumi, la carencia de parámetros mínimos de fundamentación de la infracción del artículo 297 del código adjetivo, al haberse vulnerado los principios de la lógica, específicamente, el de corroboración y razón suficiente, a cuyo respecto, sin embargo, nada dice para explicar en qué parte del ejercicio de valoración de los jueces se habrían verificado tales infracciones, y en qué habrían consistido las mismas, evidenciando de su tenor que su reproche se reduce a no compartir los argumentos vertidos por los Jueces para fundamentar sus conclusiones, propuesta que, además, aparece confusa en su redacción, al sostener que el razonamiento judicial es acomodaticio y carente de elementos objetivos para comprender la existencia del indicio y la omisión del registro de la dinámica desarrollada en el curso del procedimiento, reproches que también utilizó para fundamentar la causal principal de su recurso,



los que, a propósito de la misma, ya fueron abordados por esta Corte, según es posible comprobar en las motivaciones que anteceden.

A mayor abundamiento, estima esta Corte que lo expresado por esta defensa constituye más bien una crítica al razonamiento del Tribunal que no califica para sostener la causal en estudio al apartarse de la naturaleza y finalidades del recurso de nulidad.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, al no haberse configurado las hipótesis de nulidad invocadas por las defensas de los acusados, los arbitrios antes analizados serán rechazados.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 373 letra a), 374 letra e), 342 letra c), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZAN** los recursos de nulidad deducidos por las defensas de los acusados [REDACTED] en contra de la sentencia de diecinueve de julio del año en curso, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, y del juicio oral que le antecedió en el proceso RIT 45-2023, RUC 220094888-0, los que, por consiguiente, no son nulos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del fallo a cargo del Ministro Señor Brito.

Rol N° 183.376-2023

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., y el Abogado Integrante Sr. Eduardo Morales R. No



firma la Ministra Sra. Letelier, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso.



En Santiago, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

